

JURISPRUDÈNCIA AMBIENTAL EN CATALUÑA (pp. 2-5)

—

JURISPRUDÈNCIA AMBIENTAL A CATALUNYA (pp. 6-9)

ANNA PALLARÈS SERRANO

*Profesora agregada de Derecho Administrativo / Professora agregada de Dret
Administratiu*

Universitat Rovira i Virgili

El objetivo de esta crónica es señalar los pronunciamientos más relevantes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que se han producido en materia medioambiental en el período situado entre septiembre de 2013 y 10 de marzo de 2014. Fundamentalmente, merecen nuestra atención dos sentencias relacionadas con la materia “contaminación acústica”. En concreto, las sentencias que vamos a comentar son la STSJC 809/2013, de 7 de noviembre, y la STSJC 943/2013, de 19 de diciembre.

Siguiendo el orden cronológico establecido, la primera sentencia es fruto de un recurso de apelación contra la Sentencia núm. 80, de 17 de marzo de 2011, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 17 de Barcelona, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo, interpuesto por la representación de Don Cristóbal, contra el Decreto 1345/2008, de 28 de julio, del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, por el que se archiva la denuncia presentada por incumplimiento de la Ordenanza sobre ruidos en relación con la Ley 6/2002, de 28 de junio, de Protección contra la Contaminación Acústica, contra la academia de música Ricomà. El recurso de apelación tiene por objeto la pretensión de la parte apelante de que se revoque la Sentencia apelada y se estime el recurso contencioso-administrativo anulando el Decreto 1345/2008 y condenando al Ayuntamiento a clausurar la academia o, alternativamente, a exigir al titular de la actividad la ejecución de medidas correctoras. El fallo estima el recurso de apelación, por lo que revoca la Sentencia, y estima en parte el recurso contencioso-administrativo, por lo que anula el Decreto 1345/2008 y condena al Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès a llevar a cabo un control continuo de la inmisión acústica de la actividad en la vivienda del denunciante durante seis meses, terminados los cuales, y a la vista de los resultados obtenidos, se proseguirá el trámite conforme a derecho.

Consideramos relevante esta sentencia porque en ella se plasma, a través del fundamento de derecho cuarto y del fallo, que no se pueden tomar a la ligera las cuestiones de contaminación acústica a pesar de que aparentemente parezca que no se está vulnerando la legalidad vigente. Así, el Tribunal condena al Ayuntamiento de Sant Cugat a llevar a cabo una actividad de control continuo de la inmisión acústica durante un período de seis meses para que esta administración se asegure de que realmente se está cumpliendo en todo momento la Ordenanza sobre ruidos en relación con la Ley 6/2002.

El Tribunal toma esta decisión después de constatar la existencia de un primer informe municipal, de 7 de junio de 2006, en el que se comprueba en la vivienda del interesado

una inmisión sonora de 36 dBA y un informe sonométrico, de 28 de febrero de 2007, realizado por Vibcon, en el que se registra una inmisión sonora de 39,1 dBA —ambos informes dan un resultado por encima del límite máximo de 35 dBA establecido por la Ordenanza municipal de ruidos—; que el titular de la academia de música propone un programa de actuaciones de reducción del ruido que consiste en sustituir unos instrumentos por otros y en realizar cambios de localización de instrumentos para reducir el impacto acústico; que, como consecuencia de estos cambios, los controles puntuales que se han realizado posteriormente no vulneran los límites establecidos en la Ordenanza municipal —en el expediente administrativo existe un informe emitido por el técnico municipal, de resultados de una inspección realizada en la academia en enero de 2008, que concluye que la inmisión de ruido de la vivienda sería de 15,2 dBA, inferior al límite de 35 dBA exigido por la Ordenanza municipal, y se constata que se realizó una sonometría en el domicilio del demandante y apelante el 6 de marzo de 2008, en presencia de funcionarios municipales, de la oficina del Síndic de Greuges y del mismo interesado, que dio como resultado una inmisión de ruido de 29,5 dBA, inferior al límite máximo de 35 dBA establecido por la Ordenanza municipal de ruidos—.

A pesar de la obtención de unos resultados conforme a la legalidad en las últimas mediciones sonoras realizadas, el Tribunal afirma que “en el supuesto de autos concurren dos circunstancias, a saber, por una parte que no consta que se haya realizado control con carácter continuo de la inmisión acústica en la vivienda del denunciante, y concretamente en la habitación colindante con la Academia de música, durante la franja horaria de actividad de la misma, y por otra parte que no se han llevado a cabo (por motivos económicos) las medidas correctoras propuestas en el informe técnico aportado por el mismo titular de la Academia de música, emitido por la firma Vibcon, todo lo que lleva al convencimiento de que procede llevar a cabo un control continuo de la inmisión acústica de la actividad en la vivienda del denunciante durante un tiempo que prudencialmente se fija en seis meses”, con apoyo en la normativa de intervención integral de la Administración ambiental y de protección contra la contaminación acústica.

La segunda sentencia deriva de la interposición, por la representación procesal del Ayuntamiento de Tortosa, de un recurso de apelación contra la Sentencia de 25 de abril de 2013 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Tarragona, por la que se estimó el recurso contencioso-administrativo para la protección de los derechos

fundamentales de la persona que interpuso el recurso (Doña Zaida) contra la inactividad del Ayuntamiento de Tortosa en relación con los ruidos ocasionados en su vivienda a consecuencia de la contaminación acústica provocada por el bar musical denominado Café de la Habana, sito en Tortosa, por vulneración de los derechos a la integridad física y a la inviolabilidad del domicilio. En la Sentencia apelada se ordenó al Ayuntamiento de Tortosa cerrar de inmediato el Café de la Habana hasta la adopción de determinadas medidas correctoras relativas a su insonorización. El TSJC, en el fallo de la Sentencia objeto de comentario, desestima el recurso de apelación. La Sala fundamenta su decisión, por una parte, en la determinación de las prescripciones aplicables y, por otra, en el parecer de que “la actividad ineficaz de la Administración equivale a inactividad de la Administración”. En este sentido, el Tribunal es especialmente contundente y claro al relatar todas aquellas actuaciones u omisiones del Ayuntamiento de Tortosa que conllevaron que los niveles de inmisión sonora no cambiaran a lo largo del tiempo. En definitiva, el Tribunal deja en evidencia, respecto a este caso en particular, la dejación de las funciones y obligaciones que tiene atribuidas el Ayuntamiento de Tortosa en materia de contaminación acústica. Así, el Tribunal afirma: “En el caso que nos ocupa, sorprende que hasta en 2 ocasiones (folios 12, 52 del expediente administrativo), el Técnico Municipal de Medio Ambiente rechazara las mediciones efectuadas por la Policía Municipal, con unos niveles de decibelios extraordinariamente elevados 93,9 y 93,8, aduciendo la falta del análisis secuencial del espectro. Situación que no debía haberse producido pues ante un aviso como el recibido de la Sra. Zaida, es obligación del Ayuntamiento poner todos los medios para realizar las mediciones acústicas de tal manera que permitan determinar si se incumple efectivamente la normativa. Por tanto o se debía dotar a los Policías Locales de los sistemas de medición adecuados, o se debería haber desplazado un técnico tan cualificado como el Sr. Vidal para que efectuara él mismo las mediciones.

Por otra parte, las reacciones municipales a las mediciones consideradas válidas, y que por cierto, fueron aquellas con menor número de decibelios, la única respuesta municipal que merecieron fue imponer multas al establecimiento (hasta cinco), que en ningún caso han superado los 1.001, cuando la normativa aplicable en el momento de los hechos permitía imponer sanciones de hasta 12.000 por la comisión de infracciones consideradas graves. En cualquier caso, la imposición reiterada de sanciones, no solucionó el problema que, afectando a su salud e intimidad, padecía la Sra. Zaida,

olvidando el Ayuntamiento que las sanciones económicas no agotan sus responsabilidades ante un problema como el detectado, sino que es su obligación solucionar el mismo ordenando las medidas necesarias para el cese de las inmisiones sonoras (actual artículo 34 de la Ley 16/2002, de 1 de julio), entre las que se encontraban en el artículo 32 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, en redacción aplicable al caso de autos por razones temporales, el precintado del foco emisor, la clausura temporal, total o parcial del establecimiento, o la suspensión temporal de la autorización que habilita para el ejercicio de la actividad.

Nada de ello sucedió, sino que la actividad continuó desarrollándose con el mismo nivel de inmisión sonora que tenía cuando el titular del local fue sancionado por primera vez, en lo que constituye un claro abandono municipal de las obligaciones que la Ley 16/2002, de 1 de julio y el Decreto 176/2009, de 10 de noviembre, le imponen”.

L'objectiu d'aquesta crònica és assenyalar els pronunciaments més rellevants del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que han tingut lloc pel que fa a medi ambient entre setembre de 2013 i 10 de març de 2014. Fonamentalment, mereixen la nostra atenció dues sentències relacionades amb la "contaminació acústica". En concret, les sentències que comentarem són: la STSJC 809/2013, de 7 de novembre, i la STSJC 943/2013, de 19 de desembre.

Seguint l'orde cronològic establert, la primera sentència és fruit del recurs d'apel·lació contra la Sentència número 80, de 17 de març de 2011, del Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona, desestimària del recurs contenciós administratiu, interposat per la representació del senyor Cristóbal, contra el Decret 1345/2008, de 28 de juliol, de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, pel qual s'arxiva la denúncia presentada per haver incomplert l'Ordenança sobre sorolls amb relació a la Llei 6/2002, de protecció contra la contaminació acústica, contra l'Acadèmia de Música Ricomà. El recurs d'apel·lació té com a objecte la pretensió de la part apel·lant que es revoqui la sentència apel·lada i que s'estimi el recurs contenciós administratiu que ha d'anul·lar el Decret 1345/2008 i ha de condemnar l'Ajuntament a tancar l'Acadèmia o alternativament a exigir al titular de l'activitat que executi les mesures correctores. En la resolució s'estima el recurs d'apel·lació que revoca la sentència i s'estima en part el recurs contenciós administratiu que anul·la el Decret 1345/2008 i condemna l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a controlar de manera contínua la immissió acústica de l'activitat a l'habitatge de la part denunciant durant sis mesos; un cop transcorreguts, i a la vista dels resultats obtinguts, es prosseguirà el tràmit d'acord amb dret.

Considerem rellevant aquesta sentència perquè s'hi reflecteix, a través del fonament de dret quart i de la part dispositiva, que les qüestions de contaminació acústica no es poden prendre a la lleugera a pesar que aparentment sembli que no s'està vulnerant la legalitat vigent. Així, el Tribunal condemna l'Ajuntament de Sant Cugat a controlar de manera contínua la immissió acústica durant sis mesos perquè aquesta Administració assegurí que realment s'està complint en tot moment l'Ordenança sobre sorolls amb relació a la Llei 6/2002, de protecció contra la contaminació acústica.

El Tribunal pren aquesta decisió havent constatat: d'una banda, l'existència del primer informe municipal, de 7 de juny de 2006, en el qual es constata la immissió sonora a l'habitatge de la persona interessada per un valor de 36 dBA, i l'informe sonomètric, de

28 de febrer de 2007, elaborat per Vibcon, en el qual es registra la immissió sonora de valor 39,1 dBa; ambdós informes donen un resultat per sobre del límit màxim de 35 dBa establert per l'Ordenança municipal de sorolls; que el titular de l'Acadèmia de música proposa un programa d'actuacions per reduir el soroll que consisteix a substituir determinats instruments per d'altres i a realitzar canvis en la localització d'instruments per reduir l'impacte acústic; que, com a conseqüència d'aquests canvis, els controls puntuals que s'han realitzat posteriorment no vulneren els límits establerts en l'ordenança municipal —en l'expedient administratiu hi ha l'informe emès pel tècnic municipal, a resultes de la inspecció realitzada a l'Acadèmia al gener de 2008, que conclou que la immissió de soroll de l'habitatge seria de 15,2 dBa, inferior al límit de 35 dBa exigint per l'Ordenança municipal, i es constata que es va dur a terme una sonometria al domicili de la part demandant i apel·lant el 6 de març de 2008, en presència de funcionaris municipals, de l'oficina del Síndic de Greuges i de la mateixa persona interessada, que va donar com a resultat una immissió de soroll de 29,5 dBa, inferior al límit màxim de 35 dBa establert per l'Ordenança municipal de sorolls.

A pesar d'haver obtingut resultats d'acord amb la legalitat, en els últims mesuraments sonors, el tribunal afirma que “en el supòsit d'interlocutòries en què concorren dues circumstàncies, a saber, d'una banda que no consta que s'hagi realitzat cap control amb caràcter continu de la immissió acústica a l'habitatge de la part denunciante, i concretament en l'habitació limítrofa amb l'Acadèmia de Música, durant la franja horària d'activitat, i d'altra banda que no s'han dut a terme (per motius econòmics) les mesures correctores proposades en l'informe tècnic que ha aportat el mateix titular de l'Acadèmia de Música, emès per la firma Vibcon, tot el que arriba al convenciment que cal controlar de manera contínua la immissió acústica de l'activitat a l'habitatge de la part denunciante durant un temps que prudencialment s'estableix en sis mesos”, d'acord amb la normativa d'intervenció integral de l'Administració ambiental i de protecció contra la contaminació acústica.

La segona sentència deriva de la interposició, per la representació processal de l'Ajuntament de Tortosa, d'un recurs d'apel·lació contra la Sentència de 25 d'abril de 2013 del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona, per la qual es va estimar el recurs contenciós administratiu per a la protecció dels drets fonamentals de la persona que va interposar el recurs (senyora Zaida) contra la inactivitat de l'Ajuntament de Tortosa amb relació al soroll ocasionat al seu habitatge a conseqüència de la

contaminació acústica generada pel bar musical “Café de la Habana”, ubicat a Tortosa, per haver vulnerat els drets a la integritat física i a la inviolabilitat del domicili de la senyora Zaida. En la sentència apel·lada es va ordenar a l’Ajuntament de Tortosa que tanqués immediatament el “Café de la Habana” fins que adoptés determinades mesures correctores relatives a la insonorització del local. El TSJC, en la part dispositiva de la sentència objecte de comentari, desestima el recurs d’apel·lació. La Sala fonamenta la seva decisió, d’una banda, en la determinació de les prescripcions aplicables i, d’altra banda, en el parer que “l’activitat ineficaç de l’Administració equival a inactivitat de l’Administració”. En aquest sentit, el Tribunal és especialment contundent i clar en relatar totes les actuacions o omissions de l’Ajuntament de Tortosa que van fer que els nivells d’immissió sonora no es modifiquessin al llarg del temps. En definitiva, el Tribunal posa en evidència el desistiment de les funcions i obligacions que té atribuïdes l’Ajuntament de Tortosa pel que fa a contaminació acústica, en aquest cas en particular. Així, el Tribunal afirma: “En el cas que ens ocupa, sorprèn que fins a dues ocasions (folis 12, 52 de l’expedient administratiu), el tècnic municipal de medi ambient rebutgés els mesuraments duts a terme per la Policia Municipal, amb un nivell de decibels extraordinàriament elevat, 93,9 i 93,8, adduint la falta de l’anàlisi seqüencial de l’espectre. Situació que no hauria d’haver donat perquè davant d’un avís com el que van rebre de la senyora Zaida, l’obligació de l’Ajuntament és posar tots els mitjans per dur a terme els mesuraments acústics per determinar si s’incompleix efectivament la normativa. Per tant, calia dotar els policies locals dels sistemes de mesurament adequats, o haver desplaçat un tècnic tan qualificat com el senyor Vidal perquè ell mateix efectués els mesuraments.

D’altra banda, pel que fa a les reaccions municipals als mesuraments considerades vàlides, i que per cert, van ser les que tenien menys nombre de decibels, l’única resposta municipal que van merèixer va ser imposar multes a l’establiment (fins a cinc), que en cap cas han superat els 1.001 euros, mentre la normativa aplicable en el moment dels fets permetia imposar sancions de fins a 12.000 euros per haver comès infraccions considerades greus. En tot cas, la imposició reiterada de sancions no va solucionar el problema que patia la senyora Zaida i que li afectava la salut i la intimitat, i l’Ajuntament va oblidar que les sancions econòmiques no esgoten les seves responsabilitats davant d’un problema com el que s’ha detectat, sinó que la seva obligació és de solucionar-lo ell mateix ordenant les mesures necessàries perquè cessin

les immissions sonores (actual article 34 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol), entre les quals es troben en l'article 32 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, en redacció aplicable al cas d'interlocutòries per raons temporals, el precintament del focus emissor, la clausura temporal, total o parcial de l'establiment, o la suspensió temporal de l'autorització que habilita per exercir l'activitat.

No va succeir res d'això, sinó que l'activitat va continuar duent-se a terme amb el mateix nivell d'immissió sonora que tenia quan el titular del local va ser sancionat per primera vegada, la qual cosa constitueix un clar abandonament municipal de les obligacions que la Llei 16/2002, d'1 de juliol, i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, li imposen".